



RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes



Universidad
Nacional
de Quilmes

Talento, Miguel

Los escenarios para la elección presidencial del 2011



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Talento, M. (2010). *Los escenarios para la elección presidencial del 2011*. *Revista de ciencias sociales*, 2(18), 241-280. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1506>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

LOS ESCENARIOS PARA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 2011

Miguel Talento

La cuestión principal que domina esta etapa es el destino político del ciclo abierto en mayo de 2003, y las tácticas y estrategias de acumulación de cara a su continuidad o su clausura, en la perspectiva de las elecciones presidenciales de 2011. Lo que se discutirá en el próximo año hasta la definición electoral y lo que se debate hoy en la dura lucha cotidiana por relatar e interpretar la vida social, política, cultural y hasta deportiva de los argentinos tiene como telón de fondo la suerte del ciclo kirchnerista.

La forma en que esta disputa está trabada y la manera en que se despliega, se desarrolle y finalmente se resuelva en las elecciones del año próximo —el tipo de acciones utilizado, su enunciación discursiva, el carácter de las polarizaciones, y las modalidades del resultado final—, van a constituir un test de indudable significación sobre la naturaleza del sistema democrático argentino, y también de sus límites.

Lo que sigue, son algunas notas sobre el modo en que se definen actores y candidaturas; sobre sus ventajas y desventajas posicionales; sobre la construcción de discursos y programas; sobre los espacios principales de la confrontación y sus sistemas de acción.

A un año de las elecciones de junio de 2009

El cambio de escenarios

Después de la derrota en el tema de las retenciones y de la pérdida electoral en la elección de junio de 2009, la discusión sobre el futuro político del kirchnerismo parecía residir en la modalidad que adquiriría el fin del mandato presidencial y en los tiempos en que tal hecho se produciría. Un año después de aquel momento crítico, la discusión política discurre por otros carriles. Las especulaciones sobre escenarios destituyentes

han cedido su lugar a debates más institucionales. Han perdido cierto protagonismo y audición –aunque no cejen en su intención– los núcleos mediáticos de militancia más enconada, y han ganado espacio sectores de oposición política con mayores credenciales democráticas. La confrontación tiende a encausarse sobre las candidaturas, las formas de las internas, las modalidades de los agrupamientos opositores en un saludable ejercicio, aunque incompleto, de lucha política afectada todavía por la debilidad de las representaciones político-partidarias y por la ausencia de amplios debates programáticos, como los organizadores verdaderos de las opciones de poder político institucional en una democracia consolidada y madura.

El cambio de escenario, aun cuando no se ha revertido la correlación de fuerzas negativa para el oficialismo, está relacionado con la persistencia de la voluntad política del kirchnerismo expresada en su capacidad para sostener sin pausa diversas iniciativas políticas de contenido popular, en su habilidad para sostener unido el dispositivo parlamentario, el político territorial y el sindical eludiendo el desgajamiento y la cooptación por derecha y la deslegitimación por izquierda de tales estructuras. Y también con la incapacidad de la oposición de organizar un programa alternativo más allá de los típicos frentes de rechazo que tradicionalmente cosechó el peronismo en sus gestiones gubernamentales.

El ciclo kirchnerista

La etapa del kirchnerismo se abrió de un modo relativamente inesperado sobre las consecuencias políticas de la crisis del 2001, haciéndose intérprete del sentimiento y del reclamo de esa enorme protesta social sin vertebración orgánica ni programática. Reintrodujo en forma perdurable, después de más de cincuenta años –con la excepción de la brevísima experiencia del 1973-1974–, lineamientos centrales de un programa popular construido sobre el fondo común de la tradición peronista, buscando resolver los graves temas pendientes de la transición democrática iniciada en 1983: derechos humanos, deuda externa y relación con el poder económico.

A la legitimación de ejercicio, luego de un ascenso en debilidad relativa provocada por la ausencia expresa de Menem a la segunda vuelta de las elecciones de 2003, sucedieron resultados exitosos en las elecciones de 2005 y de 2007, con escenarios y condiciones diferentes en ambos casos.¹

¹Para un análisis más detallado, véanse los números 1 y 5 de *Cuadernos Argentina Reciente*, íntegramente dedicados a tales procesos electorarios.

La confrontación electoral del 2009

Se dijo ya que las elecciones de junio del 2009 estuvieron bajo el impacto de la disputa del año anterior por el destino de la renta agraria extraordinaria, con sus secuelas sociales y políticas. El kirchnerismo llegó al compromiso electoral en su nueva situación estratégica, mantuvo la iniciativa sobre los tiempos y el diseño táctico pero no pudo evitar que una elección intermedia se convirtiera en una gran batalla política.

Organizó su estrategia electoral con dos objetivos principales: lograr un triunfo relativo apoyado en el piso peronista del cordón suburbano, suponiendo un marco de división y dispersión opositora; y ocupar el centro del escenario político para sostener la iniciativa táctica y evitar la dispersión de su caudal electoral por absorción o cooptación, por derecha, y por deslegitimación programática, por izquierda.

La oposición buscó presentar todos los votos opositores como expresión de un solo pronunciamiento político, esquivando su fragmentación, y canalizar el descontento social en todas las fórmulas opositoras posibles.

Tales objetivos y pronósticos se cumplieron en forma parcial.

La previsión oficialista sobre la división del electorado opositor en fuerzas de volúmenes parecidos tuvo verificación, aunque la campaña del voto útil en el último tramo volcó un porcentaje de votos decisivos sobre el candidato de Unión-PRO, en la provincia de Buenos Aires, permitiéndole alcanzar la victoria. También acertó en las dificultades de unificación opositora y conservó el grueso del voto peronista del conurbano lo que le permitió mantenerse como la primera minoría electoral a nivel nacional. En consecuencia, el esquema de defensa activa en un contexto de debilidad estratégica, resultó adecuado.

La oposición fue eficaz en su objetivo de canalizar el malestar social y logró un resultado político inesperado, pues si bien las encuestas mostraban la paridad entre los candidatos y la distribución electoral hacía prever un buen desempeño opositor, el despegue del peronismo disidente en las últimas semanas respecto del panradicalismo le dio el volumen adicional de votos para el triunfo, resultado en el que se ha señalado la importancia del humor político.²

El escenario postelectoral I. Continuidad institucional

Después de la derrota electoral de junio de 2009 el kirchnerismo decidió mantener con firmeza su política de defensa activa, basada en: sostener la continuidad de la gestión gubernamental y de la institucionalidad; am-

² Rosendo Fraga planteó precisos conceptos sobre el humor político, en la campaña de 2009.

parado en la legitimidad del mandato obtenido en las elecciones de 2007; plantear la defensa de lo realizado y de los logros alcanzados desde los aparentemente lejanos días de la crisis económica y política; reforzar el contenido programático popular de sus iniciativas; mantener la iniciativa táctica, ocupando la centralidad del escenario político; evitar la degradación de sus dispositivos parlamentarios, político-territoriales y sindicales por cooptación, fragmentación o deslegitimación.

Los sectores más extremos del dispositivo opositor que se apresuraron a presentar el resultado electoral como una manifestación plebiscitaria y revocatoria contra el kirchnerismo —y se esperanzaron con una abdicación o una negociación temprana que los convirtiera en árbitros de una transición—, no ocultaron su sorpresa ante la reafirmación de la voluntad política de continuar con el ejercicio gubernamental obtenido con legitimidad y por el conjunto de iniciativas legislativas de signo popular que exitosamente el gobierno impulsó en el Parlamento, en los meses siguientes, entre ellas la estratégica normativa referida a la Ley de Medios Audiovisuales. O la disposición por decreto del Poder Ejecutivo estableciendo la Asignación Universal por Hijo, la medida más distribucionista desde que Perón impuso la legislación social en el país a mediados del siglo pasado.

No se produjo una crisis de gobernabilidad, no se desintegraron los bloques parlamentarios, no prosperaron las divisiones sindicales impulsadas por Barrionuevo y algunos “gordos”, ni los gobernadores ni los intendentes del conurbano corrieron presurosos en auxilio de los vencedores, que según las máximas de la picaresca peronista sucede con los poderes en descenso, y por lo mismo no existió el tropel de desertores que aguardaban con esperanza en los campamentos del macrismo y del peronismo disidente.³

El escenario postelectoral II. Nuevo cambio del escenario económico

La economía, después de un año difícil de desaceleración de la actividad económica —por la disputa con el campo, la crisis financiera internacional y las expectativas negativas generales—, volvió a cobrar impulso a partir del segundo semestre del 2009, tendencia que se ha ido profundizando a lo largo de ese año, retornando a las tasas chinas de este ciclo. El país y la región sortearon la crisis internacional en mejores condiciones que otras economías centrales y periféricas transnacionalizadas y sujetas a la especulación financiera sin controles ni regulaciones precisas como demostró la burbuja estadounidense de las hipotecas *subprime*.

³ Según el glosador que la acuñara, la Verdad 22, rezaría: “Concurrir presuroso en auxilio del vencedor”.

La estrategia de restarle méritos al esquema macroeconómico gubernamental siempre hizo hincapié en la importancia de los factores externos: demanda sostenida de nuestras *commodities* por las economías asiáticas, aumento de sus precios relativos, economía brasileña en expansión, mejora de las tecnologías productivas agrarias, etcétera.

En fin, el “viento de cola”, como razón externa y casual que explicaría la salida de la crisis y la mejoría económica: solo la suerte de gobernar en el momento favorable.

El relativo buen desempeño económico frente a la crisis internacional –pese al índice inflacionario y a su manejo por el INDEC–; los esfuerzos para despejar el manejo de los compromisos de pago en divisas para todo el 2010 –generando confianza en la política económica, definiendo el precio del dinero en el mercado interno–, y las acciones para resolver las secuelas finales de la quiebra del 2001 resultaron aciertos gubernamentales, y en tanto posibles activos oficialistas, se constituyeron en objetivo de los sectores más agresivos del dispositivo opositor.

El debate acerca del Fondo del Bicentenario y el uso de reservas para el pago de deuda externa, la reapertura legislativa del canje de la deuda, su índice de aceptación y la negociación con el Club de París con la finalidad de resolver los impedimentos para acceder al mercado voluntario de capitales, vedado para la Argentina desde el default, encontró alineados con las iniciativas gubernamentales, impensada y discretamente, a importantes sectores económicos y financieros tradicionalmente distantes u hostiles al kirchnerismo.

La sorpresiva crisis por el uso de las reservas no fue ajena a la necesidad del conglomerado mediático y algunos de sus socios políticos –con el acompañamiento irresponsable y especulativo de otros–, de intensificar los niveles de confrontación, amenazando el manejo de las variables macroeconómicas y afectando el esquema de gobernabilidad, urgidos en sus intereses particulares e inmediatos, sin consideración de los actores tradicionales del espacio económico-institucional, con argumentos y *timing* errados.

La mejora en los niveles de actividad económica significó la reversión de la tendencia decreciente en el volumen del empleo disponible, disminución que fue particularmente cuidada y amortiguada a través de un abanico de políticas activas para impedir o reducir los despidos en el pico de la crisis, tales como incentivos por sostenimiento de empleo; incentivos para el blanqueo laboral; elevación del salario mínimo y de las asignaciones familiares; mantenimiento de las paritarias; negociación de reducciones de turnos, adelantamiento de vacaciones y suspensiones, entre otras.

La asignación universal por hijo impactó con fuerza en la indigencia y la pobreza a través de una transferencia directa a los sectores más humildes, habitantes de la economía informal. Atada a obligaciones de salud y

educación a cumplir por los padres se tradujo en aumentos matriculares de gran significación en los tramos primario y secundario de la enseñanza y en una presión inédita sobre los servicios de salud, en términos de prevención.

La recuperación de un cuarto de millón de niños y jóvenes de la marginalidad profunda a través de mecanismos efectivos y universales empezó a resolver algunos problemas históricos de la pobreza en el país. A su vez abrió otros desafíos sobre la efectiva capacidad escolar de absorción física, educativa y cultural de masas de alumnos con experiencias de fracasos en el sistema –algunos nuevos, muchos repitentes y desertores–, que llevan las marcas de la marginalidad en sus biografías, en sus perfiles de habilidades sociales y de aprendizaje y en las limitaciones de su capital cultural individual y familiar.

Otro tanto está ocurriendo con los servicios de salud que deben reforzar el enfoque de atención primaria para resolver con eficacia la enorme oportunidad de prevención y detección temprana de un conjunto de enfermedades para grupos etéreos casi completos.

En el plano parlamentario, si bien el oficialismo ha logrado hasta ahora contener los embates más agresivos de la agenda opositora y mantener iniciativas y debates de cara a la sociedad –como en el caso de la reforma al Código Civil habilitando el matrimonio de personas del mismo sexo, con media sanción en Diputados–, es de prever una intensificación de las acciones legislativas del arco opositor, unificado en el llamado Grupo A, cuyas cabezas visibles están necesitadas y son urgidas mediáticamente a obtener resultados que castiguen o compliquen al oficialismo.

Hay que recordar que el Grupo A modificó las tradiciones legislativas de distribución de espacios en el recambio legislativo de diciembre de 2009, y ha continuado haciéndolo ante los múltiples y permanentes llamamientos de la prensa opositora, buscando convertir el Congreso en el espacio regido de la confrontación política con el kirchnerismo y obtener resultados positivos en esa batalla, con poco cuidado de actores, formas, temas y consensos.

El escenario postelectoral III. Cambios en el humor social. El bicentenario

La combinación de un conjunto de factores modificó las expectativas sociales en un sentido más positivo en los días posteriores a los festejos por el bicentenario nacional sin que ello suponga un correlato directo con opciones electorales, pero si estas modificaciones dicen algo, reflejan cierto hartazgo respecto de la feroz campaña mediática para agudizar las sensaciones negativas en la convivencia diaria de los argentinos.

Sin duda la mejoría del clima económico pese a la continuidad –aunque atenuada–, del proceso inflacionario impacta en las mediciones de imagen

y de intención de voto, pero hay una distancia significativa entre estas encuestas y lo que resulte finalmente como comportamiento electoral masivo. Al momento de ejercer su voto los electores van a tomar en cuenta un conjunto de aspectos, muchos que sucederán en los próximos meses, sobre la base de sus diversas inclinaciones formativas e ideológicas.

Los festejos del bicentenario también mostraron las formas en las que se traban ciertos debates y conflictos en el marco de la actual situación política.

Fue un acierto importante del gobierno nacional diseñar los festejos sin partidizarlos pensando en una fiesta colectiva y ubicándose en el lugar del organizador de los eventos, sin interponerse entre el regocijo popular y tal condición. Esa ubicación mostró ser la adecuada en términos políticos: la enorme mayoría de los argentinos estaba dispuesta a festejar el bicentenario como un ejercicio de identidad, como una forma de reconocimiento mutuo.

Estaban dispuestos a reconocerse como parte de una idea y un sentimiento común y a celebrar individual y masivamente esa pertenencia. A reconocerse como ciudadanos de un país que a pesar de todas sus dificultades ha alcanzado los doscientos años de vida independiente. A manifestar un orgullo legítimo en sentirse argentinos y a mostrar que hay un modo y una sensibilidad compartida, que nos define singularmente como una de las formas de estar en el mundo.

A festejar ese reconocimiento entre los argentinos, a manifestar la alegría de ese encuentro masivo y a sostener una afirmación colectiva, pacífica, alegre, aplomada, sin soberbias ni desbordes.

Esas, entre otras, han sido seguramente las razones de la masividad, la ausencia de incidentes, el sentido de hermanamiento, la sensación de felicidad colectiva. El bicentenario tocó una fibra estructural de lo argentino, de la nacionalidad en el sentido más lato, y se convirtió en un modo de reafirmación del sentimiento compartido.

Por eso cambió el humor social. Por eso hubo un momento de distanciamiento del bombardeo diario del pesimismo y fue posible advertir que con nuestros límites y con todas nuestras falencias se puede ser colectivamente. Nada más peligroso para muchos de los poderosos de hoy, herederos y beneficiarios del monstruoso aleccionamiento social del Terrorismo de Estado, que la gran mayoría de la nación recupere o adquiera, aunque sea momentáneamente, conciencia, visión, sentimiento de unidad en la diversidad y sensación de pertenencia.

El conjunto captó que el gobierno aceptaba esta voluntad común y que se ofrecía solo como vehículo de tal sentimiento colectivo. Ese fue su mérito y le permitió cosechar en forma indirecta el beneficio del cambio de clima social.

Mientras algunos medios se preparaban para convertir el bicentenario en un escandaleto de proporciones alrededor de la presencia de la Presi-

denta en la velada del Colón a la que se negó a ir luego de las desacertadas intervenciones del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en construir como ofensa su ausencia al desfile militar y otros, más doctrinarios, se escandalizaban por el contenido ideológico de la magnífica expresión artística de Fuerza Bruta, la abrumadora mayoría de la sociedad aprovechó la oportunidad para sentirse honrada y sencillamente argentina.

El próximo escenario electoral: la elección presidencial del 2011

La sombra de Mor Roig y el Pacto de Olivos

La próxima elección presidencial va a estar condicionada por el viejo esquema –inspirado en una receta francesa para otro tipo de problemas político-institucionales–, diseñado por Arturo Mor Roig, como ministro del Interior de la dictadura de Lanusse, para intentar resolver el problema del volumen electoral del peronismo. Su vigencia electoral había resultado insoluble para el sistema político instaurado por el golpe de 1955. Las “soluciones” fueron su proscripción lisa y llana y sus sucedáneos políticos de cooptación, integración, combinadas con la exclusión y represión de sus núcleos más duros.

El *ballottage*, o doble vuelta electoral, fue la solución de la Constitución de la V República Francesa para fortalecer la institución presidencial, a la medida del liderazgo de De Gaulle, y para resolver la profunda crisis institucional de los gobiernos parlamentarios de la IV República frente a la herencia colonial y la guerra de Argelia.

El problema francés residía en la fragmentación del arco político y en la necesidad de construir una fuente de poder político-institucional con la suficiente fortaleza, legalidad y legitimidad para tomar decisiones definitivas respecto de la situación argelina y sus secuelas y respecto del despertar independentista de los pueblos colonizados por Francia en África y en el resto del mundo.

El problema argentino era distinto: el peronismo resultaba la primera minoría en las elecciones post 1955 –en la reelección de 1952 llegó a sumar el 62% del cuerpo electoral– y encontraba ya sea por vía del voto en blanco, de votar un candidato ajeno, de fórmulas neoperonistas, modos de influir en el panorama político a la vez que denunciar su exclusión.

El resto de las fuerzas se distribuía un volumen variable pero superior al 50% del electorado: la cuestión insoluble era su unificación voluntaria.

El *ballottage* criollo imaginado por Mor Roig consistió en adoptar un mecanismo institucional que obligara la unificación del no peronismo, por la vía del juego de la segunda vuelta electoral, inspirado en la solución francesa.

Así se intentó condicionar la salida electoral de 1973 reformando por decreto la Constitución Nacional, incorporando la doble vuelta, sustituyendo el Colegio Electoral previsto por los constituyentes de 1853. Sin embargo, el sistema en su debut no tuvo los resultados esperados porque el FREJULI obtuvo el 49,5% de los sufragios, el radicalismo desistió de una segunda vuelta y la norma resultó posteriormente derogada.

En la reforma constitucional de 1994 el tema de la fórmula criolla de la segunda vuelta se volvió a plantear y, con recortes y particularidades, integró los acuerdos alcanzados en el denominado Pacto de Olivos. El temario condicionado de la Convención Constituyente, que contenía las concesiones acordadas a cambio de la modificación de la cláusula que impedía la reelección presidencial, lo preveía con un diseño atenuado, consecuencia de las negociaciones realizadas.

Se pactó un *ballottage* atenuado: la segunda vuelta no resultaría necesaria cuando el candidato más votado exceda el piso del 45% del electorado o cuando la diferencia con el segundo más votado supere el 10%, sobre un piso mínimo del 40% (CN, arts. 97 y 98).

El acuerdo alcanzado es muy claro en sus propios términos: se introdujo el *ballottage* al precio de abolir el Colegio Electoral, con la esperanza de recoger los votos no peronistas planteándose como el principal canal alternativo. Del otro lado se buscó disminuir el efecto de la unificación en su contra bajando el piso necesario para consagrarse en la primera vuelta, próximo al piso electoral histórico del peronismo y hacer pesar su capacidad de representación en los grandes conglomerados urbanos, especialmente en el Gran Buenos Aires.

Resolución en primera o en segunda vuelta, una cuestión importante para el 2011

La resolución electoral del 2011 en primera o segunda vuelta adquiere un carácter estratégico ya que el marco constitucional antes aludido, el carácter de la elección presidencial y la actual relación de fuerzas permiten deducir que las chances del candidato kirchnerista y del candidato opositor más votado, difieren significativamente entre ambos turnos electorales.

Las elecciones para cargos ejecutivos son oportunidades electorales en las que los votantes evitan la dispersión del voto, es decir pretenden incidir certeramente sobre las opciones disponibles y la forma de hacerlo es escoger entre las que tienen más posibilidades de éxito. Este comportamiento se diferencia del que asumen los electores en las elecciones intermedias o de renovación parlamentaria, donde se tienen en vista otros aspectos, como preocuparse por la composición equilibrada de los poderes institucionales, ejercer el voto castigo o apostar por opciones con mayor riesgo, ya sea por novedad programática o por la novedad del candidato.

La mencionada tendencia a la dispersión puede ceder si se configura un escenario como el de las elecciones nacionales de junio de 2009, en el que primó la nacionalización de la campaña en términos plebiscitarios y se buscó presentar el pronunciamiento electoral como una manifestación revocatoria de la voluntad electoral, elaboración sin amparo legal alguno y de obvia factura mediática.

En las elecciones presidenciales se valora la experiencia de gestión, las acreditaciones en el manejo institucional y habitualmente los electorados son reacios a los saltos al vacío salvo que la situación imperante por el grado de su deterioro, por la existencia de una disconformidad extendida o por la calidad de la alternativa lleve masivamente a preferir al candidato que exprese el cambio de expectativas.

La confrontación presidencial del 2011 tenderá a la fuerte polarización en tanto será centro de los debates la valoración general del ciclo kirchnerista y su continuidad, y por lo mismo constreñirá a los candidatos oponentes con el razonamiento del voto útil aun en la primera vuelta.

Pero así como la tendencia a la concentración tendrá un papel determinante, también lo tendrán aquellos que estén en condiciones de restar o dividir dentro de cada espacio en competencia pero en particular en el peronismo. Porque el mecanismo de la segunda vuelta esta vez, después de tantos años de su diseño, puede jugar como un modo efectivo de obligar a reunir los votos no peronistas que de otro modo no confluían.

El desafío de aspirar al triunfo en la primera vuelta electoral, que implica al menos alcanzar el 40% del total de los electores requiere de una unidad muy amplia del peronismo, y del concurso y apoyo de otras fuerzas progresistas y centristas que valoren en forma positiva el ciclo abierto en 2003 y trabajen activamente por su continuidad.

La unidad del peronismo: transacción y programa. El rol de la disidencia y la deslegitimación por izquierda

La necesidad de lograr un triunfo en primer turno, que implica reunir algo más del piso electoral histórico del peronismo, pone en foco el rol del peronismo disidente que asumirá un valor estratégico en la medida que integre el dispositivo electoral opositor como una fuerza auxiliar pero significativa, precisamente porque los votos que reste en primera vuelta pueden ser los necesarios para forzar el segundo turno electoral que permita batir al oficialismo.

Este sector mantiene todavía discursos diversos sobre la concurrencia a las internas unificadoras recién reglamentadas (Solá manifiesta su vocación de ir por fuera de la institucionalidad peronista, Duhalde dice que concurrirá porque va a ganar).

Jugar el rol de garantizar la derrota oficialista puede resultarle complicado a las fracciones disidentes dentro de la tradición peronista —de ejercer el poder y de no cederlo alegremente—, pues tendrían que explicar con detalle el sistema de acuerdos y de garantías que hayan convenido con el candidato que se beneficiaría de la licuación kirchnerista, sabiendo que tales explicaciones no son simples.

Y estas dificultades no emergen de la dureza de la identidad del peronismo o de su fortaleza programática sino de otro fenómeno complejo pero operante que es el del alineamiento mayoritario de los dispositivos de poder territorial en virtud del liderazgo partidario asentado en el poder del Estado, con el fin de garantizar su permanencia y continuidad política, en los marcos de una muy amplia definición del peronismo.⁴

La ausencia de una convocatoria nacional del kirchnerismo en todos estos años ha privado al oficialismo de una estructura política propia para articular su poder territorial y sindical por lo que la construcción de la candidatura y de la unidad detrás de la misma deberá pasar por el “momento deliberativo” de los tradicionales sistemas de negociación, sobre la base de la pluralidad de ofertas.

Los espacios típicos para ello lo constituyen la liga de gobernadores, la liga de los intendentes del conurbano —los de mayor poder territorial—, las dirigencias de algunos de los municipios de importancia en la provincia de Buenos Aires y de otras ciudades grandes en las provincias que han desplegado capacidad de negociación propia. En un nivel menor pero también de significación están las redes de militancia territorial que en algunos distritos gozan de autonomía frente a las dirigencias municipales y requieren su habilitación como actores en los acuerdos políticos que involucran a la zona.

Otro tanto ocurre con el mundo sindical con una mayor tradición de negociación centralizada aun cuando los gremios de mayor peso estratégico en el proceso productivo tengan una posición privilegiada en esas conversaciones.

La unidad del peronismo territorial y sindical se teje capilarmente con la ayuda del poder central y con los referentes de sus casi infinitos espacios. Esta enorme complejidad es la que ilusiona al duhaldismo y otros sectores de la disidencia para buscar compromisos reversibles con caudillos que pueden ceder a la tentación de apostar en más de un juego. En la estructuración de los acuerdos, los garantes políticos son los que asegu-

⁴ La lógica de privilegiar la alineación política con quien ejerce el poder estatal y salvaguardar la continuidad política de las agrupaciones territoriales, con independencia del programa que se aplique, tuvo una incidencia significativa en la mutación menemista del programa del peronismo originario, y permitió que a su nombre se ejecutara un esquema de eliminación de derechos y de vulneración de la soberanía económica diametralmente opuesto a aquel pensado y ejecutado para resolver la cuestión social en el país.

ran y garantizan los sistemas de lealtades de naturaleza transaccional y su rol es significativo para reducir o limitar la volatilidad y la intercambiabilidad de las articulaciones políticas.

Esta descripción de los sistemas transaccionales de la política real no agota el proceso de construcción de la candidatura oficialista porque el momento deliberativo de cierta horizontalidad silvestre está condicionado por la inercia de los liderazgos ya construidos y por su capacidad de acción, de gestión y de discurso a favor de los sectores populares.

La gestación de la candidatura del kirchnerismo va a surgir de la combinación de los sistemas transaccionales tradicionales del peronismo, de la puesta en valor de la gestión gubernamental en este ciclo en virtud de sus iniciativas de contenido popular y de la recuperación programática y discursiva de los contenidos populares del justicialismo como una práctica ligada al beneficio material y cultural de las mayorías.

En suma, la unidad más amplia del peronismo que permite alcanzar el triunfo en primera vuelta es la jugada principal del kirchnerismo. Tratar de impedir su consagración en primer turno agrega valor a los grupos disidentes que resulten funcionales a la principal candidatura opositora. Finalmente, un costado que también tiene significación en esta batalla es el daño que puede producir una deslegitimación por izquierda del dispositivo oficial.

Por eso, los discursos con una fuerte carga de agresividad política desde la izquierda tienen una particular audición y resonancia en el cuidadoso dispositivo opositor mediático.

Así, el discurso de la pejetización del kirchnerismo elaborado por el piqueterismo social de viejo cuño perretista y la conceptualización del oficialismo como un “simulacro progresista”, ambos con presencia orgánica en Proyecto Sur, resultan de gran interés para el dispositivo opositor que busca darle potencia mediática a discursos izquierdistas que descalifiquen enérgicamente al gobierno desde esa óptica.

No ocurre lo mismo con el agrupamiento liderado por Martín Sabbatella que se plantea una diferenciación cuidadosa y respetuosa por izquierda del oficialismo, pero que en esa medida, carece del valor deslegitimante buscado.

Otro aspecto que queda oscurecido por la tensión de obtener una definición en primer turno es el análisis más detallado de la tesis de la unificación casi automática de todos los votos de los candidatos no oficiales en la segunda vuelta, habida cuenta de las diferencias significativas entre tradiciones políticas nacionales. Desde luego que la homogeneización mediática juega un rol de importancia en limar los “aspectos secundarios” del objetivo de batir al kirchnerismo. Votos cruzados los ha habido en cantidad durante el período democrático, pero puede haber resistencias relevantes en el ejercicio sin antecedentes previos de una transferencia de votos forzada y masiva a candidatos de otras vertientes.

Espacios opositores y posibles candidaturas: ausencia de un liderazgo emergente

Como se dijo, en las elecciones de hace un año, parecieron coagularse de modo casi definitivo cambios en la correlación de fuerzas políticas e institucionales en el país, cuyo antecedente principal lo constituía el largo proceso que culminó con el rechazo de la Resolución 125 en el Senado.

Sin embargo, y a diferencia de otras elecciones intermedias en las que otros oficialismos resultaron derrotados, Alfonsín en 1987, Menem en 1997 y De la Rúa en 2001, no emergió claro de las mismas un liderazgo, ni una fuerza de alternativa al kirchnerismo.

La oposición se robusteció –tanto que sumadas todas sus expresiones alcanzaron los dos tercios del electorado, aunque el kirchnerismo continuó como la primera minoría a nivel nacional–, pero en un marco de tensiones y divisiones en el que las diferentes expresiones naturalmente pujaron y puján por acrecentar sus chances sectoriales e impulsar sus candidatos para las elecciones del 2011.

Como consecuencia electoral del 2009 y de las distintas estrategias aplicadas en el año subsiguiente, han quedado establecidos varios espacios principales de oposición.

a) El peronismo disidente es un espacio amplio y heterogéneo que contiene bloques parlamentarios en Diputados y Senadores, y como agrupamientos internos expresa al duhaldismo, al menemismo, a gobernadores con proyectos autónomos como Rodríguez Saá o Das Neves, a figuras nacionales como Reuteman, Felipe Solá o De Narváez, a sectores de la dirigencia sindical vinculada a Barrionuevo, Venegas, etc. y a otros sectores de dirigencia territorial.

En este espacio hay un pelotón de presidenciables aunque la problemática de su unificación puede relativizarse –sería posible que hubiera más de un candidato en la elección presidencial–, en la medida en que se subordine a una estrategia opositora común y el rol de la disidencia peronista esté ceñida a limitar y recortar electores de esta pertenencia al candidato oficialista. La otra tensión unificadora podría surgir de un acuerdo general entre las fracciones disidentes y el kirchnerismo para decidir la candidatura presidencial en una auténtica interna partidaria. Este escenario, pese a la normativa electoral y su motorización reciente con el dictado de varios decretos, todavía no parece probable aunque resulte lógico relevarlo como posible.

En cuanto a candidaturas, el senador santafesino Carlos Reuteman ha concitado y concita las mayores expectativas si finalmente decidiera aceptar la nominación. Las razones de su negativa nunca resultaron claras ni en 2002 ni ahora, pero muchos voceros de la disidencia se esperan con una posible maniobra tiempista, augurando una aceptación en un momento más próximo a la confrontación electoral. La eventual

candidatura de Reuteman tendría efectos colaterales importantes sobre los otros candidatos de peronismo disidente y también sobre Mauricio Macri, que en tal caso, probablemente, optaría por jugar su reelección porteña.

Tanto Solá como Duhalde han manifestado su vocación presidencial y trabajan para ello, acumulando la mayor cantidad de fuerza posible para el momento de una eventual negociación dentro de la disidencia. De Narváez ha ratificado sus aspiraciones presidenciales pero conoce sus limitaciones legales por ser ciudadano colombiano de nacimiento, condición argüida hasta por sus propios socios-rivales. Espera el tiempo de una negociación global para obtener garantías y condiciones, si finalmente tiene que aceptar la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El espacio del peronismo disidente tiene protagonismo en la ofensiva parlamentaria contra el oficialismo, motorizando iniciativas del Grupo A, en tanto alguno de sus miembros tienen una destacada actuación en el Congreso.

b) El macrismo, integrante de la alianza ganadora en junio de 2009 como Unión-PRO, no ha logrado trascender su condición esencial de ser una fuerza porteña, con cierta capacidad de proyección sobre el primer cordón del conurbano, dependiente en tal caso de su sistema de alianza con sectores de la disidencia peronista. La lucha de los socios triunfadores en 2009 entre sí para dirimir la candidatura presidencial se ha traducido en posicionamientos diferentes y en tomas de distancia entre todos.

Macri no quiere atarse con exclusividad al peronismo disidente y a algunas de sus figuras porque pretende sumar otros apoyos, que teme perder si peroniza excesivamente su perfil. De hecho en el macrismo es posible identificar aportes independientes, radicales, de los viejos partidos de la derecha conservadora, federales, demoprogresistas y hasta algún ex comunista.

En la definición de su candidatura presidencial, además de los avatares externos, pesan las dificultades de la gestión y sobre todo los errores no forzados como los costos políticos incurridos en el proceso de constitución de la Policía Metropolitana, que le han valido una fuerte tensión con la Federal y su exposición en temas judiciales abiertos (las causas de las escuchas telefónicas y del mobiliario urbano).

En este contexto, su plan B es una probable reelección porteña para esperar el nuevo turno presidencial del 2015, habida cuenta de la ventaja que le otorga la dispersión opositora en la Ciudad y su condición de candidato todavía joven que puede optar por no presentarse, sin perder sus chances futuras.

El macrismo participa de modo muy activo en la actividad parlamentaria del Grupo A a través de diputados como Pinedo y Bertol.

c) El panradicalismo, fortalecido luego de la elección de 2009, encontró obstáculos para articularse a partir de las distintas estrategias de sobrevivencia política que aplicaron después del 2001: la de los que se asociaron al gobierno hasta la Resolución 125, la de los que permanecieron “resistiendo” en el viejo partido centenario y la de los que acompañaron a Carrió en su periplo al ARI y luego a la Coalición Cívica.

La interna radical en la provincia de Buenos Aires que ganó Ricardo Alfonsín le permitió ganar estatura y proyectarse como un candidato presidencial alternativo a Julio Cobos, hasta ese momento la mejor carta electoral del partido centenario.

Su aparición ha significado una amenaza cierta a las aspiraciones cobistas, pues el hijo de Alfonsín —ya dirigente por peso propio luego de su consagración electoral—, expresa conducta partidaria, tradición radical por la historia familiar y legitimidad en su ascenso toda vez que emerge de un proceso electoral frente a contendientes de peso. Todo ello marca diferencias significativas frente a Cobos, un dirigente que se fue y volvió del radicalismo, después de una expulsión escandalosa, y que debe su fama a un acto de conciencia —según su manifestación—, que protagonizó sin hacerse cargo de sus consecuencias políticas, al punto que parte de los presidenciables opositores le han señalado la dificultad de continuar en el doble papel de precandidato presidencial opositor y de vicepresidente.

Todo marca el camino de una interna entre ambos para dirimir la candidatura presidencial o una negociación de estilo radical, con un complejo reparto de espacios y protagonismos. No parece probable que Carrió acepte las reglas de una interna de su viejo partido, ni que el ganador resigne su posición frente a ella, ni que ella acepte acompañar al triunfador. En caso que haya una confluencia para reconstruir una oferta electoral potente del radicalismo cabe la posibilidad que Carrió se autoexcluya de cualquier aspiración electiva para el 2011 —puede continuar con su mandato de diputada por dos años más—, pero reclame un rol de supervisión y de gran electora partidaria.

Una candidatura de Ricardo Alfonsín reabriría una probable alianza con el socialismo santafesino y con otras fuerzas menores, en la perspectiva del 2011.

El radicalismo participa con ímpetu en el arco opositor parlamentario a través de las gestiones y actuaciones de los senadores Sans y Morales y del diputado Ahuad, como los más conspicuos en tales labores.

d) Proyecto Sur expresó electoralmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una coalición de diversos sectores de centroizquierda: los asociados a agrupaciones sindicales de la CTA, expresiones del piqueterismo social que trabajaron en el kirchnerismo hasta el primer semestre de 2009, sectores con tradición de militancia en derechos humanos y figuras

y espacios del campo de la cultura y del mundo profesional. Este espacio opositor está cruzado por el dilema a resolver, de participar en las ofensivas parlamentarias del Grupo A y el origen y compromiso ideológico de muchos de sus cuadros y votantes. Y en virtud de ese mismo dilema rever o ratificar la estrategia discursiva de gran dureza y confrontación con el oficialismo.

El alto porcentaje de votos obtenido en Capital alimentó la candidatura presidencial, con pocas chances, de su referente Pino Solanas. Son muchos los que plantean dentro de Proyecto Sur la conveniencia de que Solanas compita por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que complicaría ciertamente a Macri, mientras otros hacen referencia a pactos preexistentes de los que surgiría la candidatura a jefe de gobierno del diputado Claudio Lozano.

La cuestión de la unidad de la oposición

Un programa de oposición se puede establecer de variados modos, pero en todos los casos tiene importancia conocer el qué, el cómo y el para qué se construye. La unidad entre fuerzas de tradición ideológica y cultural diferente siempre resulta un tema de difícil solución para cualquier agrupamiento opositor.

Puede haber distintos modos de alcanzar la unidad de acción de un conjunto opositor: desde el mínimo de una agenda común que torne operativo un conjunto político de intereses heterogéneos hasta un programa madurado en un proceso de coincidencias, con concesiones mutuas, equipos profesionales compartidos, candidaturas negociadas y resueltas sin rencores perdurables entre los aliados y con vistas a hacer viable una posterior gestión gubernamental conjunta.

Una agenda mínima tiende a definir formas de unidad coyunturales para maximizar el peso de sectores que aislados tendrían menor incidencia o impacto político. A esta especie pertenecen los agrupamientos por el rechazo, es decir, conjunciones de fuerzas logradas en lo fundamental por el acuerdo de oponerse, limitar, rechazar, condicionar una gestión oficial en curso.

Pero cualquiera sea el tipo de unidad alcanzado resulta de importancia establecer en donde reside la fuente y el origen de la misma, es decir, cuál es la naturaleza del factor que la articula. La prevalencia de factores externos tiende a ser mayor en las unidades de tipo más coyuntural mientras que los procesos de una unidad más orgánica suponen mediaciones que modulan, compensan y limitan las influencias exteriores.

Por los últimos movimientos en el espacio parlamentario el arco opositor ha logrado definir una agenda de confrontación en la cual ha jugado un papel significativo la necesidad de producir hechos políticos que limiten el accionar del oficialismo y que lo exhiban asimismo con iniciativas,

como en el caso del 82% móvil en los haberes jubilatorios. Esta última es particularmente analizada y celebrada por editorialistas y comentaristas de los núcleos mediáticos opositores porque entabla un conflicto con capacidad de desgaste popular del oficialismo, a la que están atentos de modo especial.

Mantener la unidad táctica opositora implica el cómo y desde dónde darle continuidad a proyectos, candidatos e identidades variadas, más allá de los distintos estilos opositores. Y esa unidad o tiene un basamento desde la lógica política –como negociación, como mera conveniencia, como articulación puntual de componentes–, deviene programática, se hace visible y se sintetiza en candidaturas; o tiende a reconvertir su continuidad mediante el apoyo externo de los intereses corporativos permanentes, de aquellos que influyen social, política y culturalmente con independencia de los ciclos democráticos y representan algunos de los centros de poder tradicional del país.

La cuestión de la unidad opositora, su vertebración y su continuidad, está presente y no ha sido resuelta, más allá de sus primeros éxitos parlamentarios, y constituye hasta ahora un déficit importante del arco opositor y en esa medida y en tanto se mantengan sus dificultades, resulta un activo para el oficialismo.

Habrà que prestar mucha atención a los modos en que evolucionan los espacios opositores entre sí y en relación con el oficialismo y como se sitúan frente al desafío dilemático de su eje organizador: en otras palabras cómo, quiénes y a través de que mecanismos se definirán candidatos y programas en el o los espacios opositores.

Desde luego que no es dable esperar un proceso aséptico en el marco de la debilidad estructural del sistema político argentino y es un clásico nacional resolver los encolumnamientos internos ajustando “desde arriba” mediante el posicionamiento de un candidato mediáticamente notable.

Queda la incógnita de las modalidades de aplicación de la nueva ley electoral recientemente reglamentada, su cronograma y su impacto sobre este proceso electoral, en cuanto regula los procesos partidarios de selección de candidatos, fortaleciendo en forma simultánea la unificación de los partidos políticos.

El rol opositor de los medios de comunicación

Los intentos mediáticos de construir la unidad opositora

La diversidad opositora y sus evidentes dificultades para coordinar un programa común de acciones llevó a los formadores de opinión de los núcleos mediáticos más activos, al liderazgo ruralista y a estructuras más

sigilosas pero no menos efectivas a multiplicar las apelaciones públicas y privadas a la unidad opositora, señalando la necesidad de deponer las apetencias y diferencias menores y a producir demostraciones efectivas de la nueva relación de fuerzas o más recientemente, llamando la atención sobre la “convalecencia” del oficialismo, denunciando la ineficacia opositora, castigando editorialmente sus “debilidades”, alertando sobre la pérdida de sus chances si persiste la dispersión opositora o alentando a ganar y sostener la iniciativa política en el Parlamento como espacio central de confrontación.⁵

La dificultad de estos llamamientos fue su baja incidencia durante casi un año, aunque ahora parece manifestarse una mejor articulación entre estas apelaciones y el efectivo tramado de intereses, vocaciones y aspiraciones de las corrientes opositoras. Estas apelaciones “desde arriba”, estos intentos de conducción mediática de las fuerzas opositoras tienen la ventaja de su potencia enunciativa, que además los reviste de una apariencia de mayor racionalidad, de la ilusión de una mayor unidad en un programa general de oposición, que la que exhiben las pujas sectoriales y las apetencias individuales: el único problema es que tales elementos constituyen la materia sobre la que se moldean las acciones políticas y que los columnistas de opinión, pese a su repercusión cotidiana, a su audaz paso a la política en sus clamores y en sus escritos –sin dejar sus pretensiones de objetividad e independencia pese a su ferocidad opositora–, no resuelven las construcciones de liderazgos, las hegemonías, ni las opciones programáticas reales.

La construcción del sujeto: el sujeto indignado y escandalizado

Un modo puntual y momentáneo de sortear el problema de la unidad de la oposición es organizarla discursivamente como reacción legítima a previos agravios, ultrajes, desconsideraciones, atropellos y faltas de respeto institucionales, sean reales o supuestas. Para producir unidad de acción desde la restauración de lo violentado, lo agraviado o lo desconocido se apela a categorías explicativas de naturaleza emotiva, se constituye con eficacia mediática un sujeto discursivo, pero se oblitera la naturaleza política de las acciones comunes, su contexto, sus beneficiarios y el destino general de acumulación que poseen.

Esta peligrosa sustitución del análisis político por la indignación y por el escándalo organiza su economía psicológica desde la reactividad, no trabaja en los detalles y en las distinciones que precisan la acción sino que

⁵ Véanse “Las razones de la convalecencia kirchnerista”, por Joaquín Morales Solá y “En la dispersión gana Kirchner”, por Mariano Grondona, publicados en *La Nación*.

se dirige a la masividad de la respuesta y privilegia la restauración y la reparación en una medida subjetiva, para compensar el sentimiento de ofensa, base de cualquier indignación y de la reacción escandalizada. Nada más alejado de la lógica política, en cualquiera de sus formas. Sin embargo, en el doble estándar mediático la indignación y la manifestación escandalizada son actitudes políticamente correctas. En cambio la crispación atribuida al kirchnerismo constituye la prueba y la muestra del desequilibrio político y hasta personal de los gobernantes en el tratamiento de la política y de la cosa pública.

Cualquier frente opositor basado en acuerdos razonables y públicos es parte esencial del juego democrático pero es poco probable que tales acuerdos tengan como objetivo central y excluyente aleccionar y castigar al oficialismo. Resulta una contradicción demasiado grosera aun para la manipulación mediática fundar una gestualidad de oposición acérrima e implacable en el merecido castigo al mentado estilo del kirchnerismo.

La construcción discursiva de un sujeto airado y escandalizado que clama castigo es altamente perniciosa en los espacios institucionales porque revela una vocación cultural primitiva y errada. Y resulta también equivocada la pretensión de retaliación frente a agravios, supuestos o reales, señalados como desmesura e invocados inmediatamente como fundamento de una desmesura similar o mayor.

De todos modos, estas argucias discursivas no deben sorprendernos porque hay que recordar que el sistema político instaurado por el golpe de 1955 fundaba en los atropellos mayoritarios del primer peronismo, demostración de su condición antidemocrática, la necesidad de excluirlo, quebrando así la regla básica de la mayoría sobre la que se asentaron los gobiernos “democráticos”, entre 1958 y 1966.

Pese a su simpleza y a la destructividad del tejido político este tipo de construcción discursiva ha verificado su eficacia en algunas prédicas sosteniéndose como una apelación de apariencia política, normalmente acompañadas de predicciones esotéricas, catastrofistas o escandalizadas y tributarias de intereses mediáticos que permiten e impulsan su reproducción.

La construcción del objeto: el kirchnerismo como expresión del mal absoluto

La demonización del oficialismo pone en cuestión los límites de la lucha política, ideológica y cultural en el marco democrático. Tal operación sobre cualquiera de los actores de la lucha política no resulta compatible con niveles aceptables de tolerancia y crítica típicos del juego democrático, porque tal construcción en la experiencia histórica en general y en particular en nuestra historia reciente termina constituyendo parte de los actos preparatorios de algún tipo de exclusión o supresión del demoni-

zado y por consiguiente de afectación esencial de las reglas mismas del juego democrático.⁶

La construcción de una imagen binaria y maniquea tiene muchas virtualidades en tanto recorta, oblitera, oscurece y termina expropiando por supresión y confusión los aspectos positivos del demonizado, arrasando sus anclajes fácticos, aplanando sus características reales. Estas operaciones son precondiciones para su presentación como expresión de una sumatoria de males que amerita luego las condiciones de su tratamiento y su destino.

Estas operaciones “intelectuales” realizadas por columnistas, comentaristas, presentadores, movileros, “oyentes” y “lectores” en poses ingenuas, doctorales o infatuadas, indignadas o escandalizadas son pequeños pero peligrosos remedos de formas de intolerancia con una vasta tradición en Occidente, desde las guerras religiosas al Holocausto.

En un marco democrático resulta razonable y lógico que se produzcan debates y confrontaciones de discursos y posiciones en las que se disputa la nominación y la interpretación de los hechos, su descripción y su inscripción en contextos de sentido que potencian o inhiben sus significados, como ocurre por ejemplo con la voluntad de resignificar el tema de la pobreza desde perspectivas institucionales que han estado tradicionalmente vinculadas con las políticas que la han producido o que la han aumentado en el país.⁷ Ello da lugar a debates, batallas culturales e ideológicas dentro de los marcos inherentes a la diversidad y a la pluralidad de una sociedad que vive en democracia.

En las batallas político-culturales las estructuras discursivas son las herramientas que los actores utilizan para expresarse, convencer y vencer.

El problema aparece cuando la estructura discursiva se centra en el desconocimiento del “otro” por vía del recorte interesado de sus condiciones, por la desconfianza y la sospecha de sus intenciones, por la negación radical de atisbos de verdad en su texto, por construirlo como un otro solo disvalioso.

No es indiferente el tipo de argumentos que se usan en estas confrontaciones así como su calidad y su oportunidad. También califica a los emisores la naturaleza, calidad y temporalidad de sus argumentos. Y ambos términos resultan ilustrativos sobre las condiciones, términos y límites de la convivencia democrática de los argentinos.

Cuando algún líder opositor compara lo que entiende el “despojo” a los usuarios de las administradoras de fondos y Jubilaciones y Pensiones (AFJP) por la modificación legislativa de la ley que las habilitaba con

⁶ Hay una amplia reflexión filosófica, sociológica y artística sobre la “idea del mal absoluto”, sobre todo después del nazismo. Aquí se hace referencia al modo estructural de construir al “otro” en ciertos discursos políticos y mediáticos.

⁷ Véase Carta Abierta/6. En sus primeros párrafos hay un eximio análisis de esos intentos.

los judíos realmente despojados y camino a una muerte horrible en Treblinka, no solo busca un golpe de efecto vía una exageración deleznable, sino que lleva adelante una operación intelectual fraudulenta. Compara lo que sabe incomparable: modificación parlamentaria de un régimen jurídico en un marco democrático con el plan criminal de la dictadura nazi para despojar y suprimir a los miembros de una tradición religiosa y cultural milenaria.

Lo hace buscando el efecto emocional que puede producir en los receptores de la comparación el tremendo drama del Holocausto, con la pretensión de que el deslizamiento de ese conjunto de sentidos de una situación histórica a otra, alrededor de la idea de “despojo”, le permita obtener un módico rédito político.

Los efectos de este modo de intervención en los debates son muy significativos para la convivencia democrática. Degradan los debates, banalizan los argumentos, refuerzan la incomprensión social del ejercicio de la política.

La inflación de adjetivaciones en el debate político común no deja lugar más que para la radicalización y el aislamiento de aquellas fuerzas y dirigencias que lo intentan, salvo que tales extremos sean útiles en el contexto de otras batallas políticas en la que los radicalizados adjetivados resultan meros actores de reparto, lo que permite entender porqué sus comportamientos intelectualmente tramposos pueden escapar a su destino de aislamiento.

Cuando otro líder opositor manifiesta, con ajenidad pasmosa, su “hartazgo frente a los cortes de tránsito”, sin sentirse interpelado por los reclamos que tenían por objetivo dejar en evidencia la incuria de sus funcionarios, termina propiciando la intolerancia frente a los desamparados que claman por sus derechos, en vez de propiciar las soluciones para sus clamores.

Porque este “hartazgo” frente a la protesta social pretende articular el descontento lógico de todos aquellos incomodados por los cortes –sin analizar las razones que tuvieron aquellos que protestaban, eludiendo la comprensión de sus argumentos–, y utilizar la fuerza de ese descontento en una reacción decisiva y eficaz para suprimirlas.

Esa declaración de hartazgo tiene otra virtualidad, otra pretensión, que es enjuiciar la política de tolerancia y de convivencia democrática del gobierno nacional frente a la protesta social como la responsable del caos urbano, incorporándola a un relato abstracto y autoritario.

Y esta es otra forma del fraude intelectual: elude la discusión abierta sobre las libertades públicas, sobre los modos de gestionar las protestas, sobre el manejo de las fuerzas de seguridad en las protestas sociales de signo diferente.

En cambio, apalancado en los efectos negativos de las protestas en el espacio urbano, propone reacciones emocionales que amplifican la ma-

sividad de la respuesta, que indiscriminan situaciones, que redundan en resultados menos racionales, desertando abiertamente de la función dirigente para la que fue investido y que debería cumplir con plena buena fe.

En contraposición fáctica el gobierno nacional ha garantizado el ejercicio de las libertades públicas y del derecho de expresión en los espacios públicos y ha cumplido con vocación, firmeza y convicción ese mandato constitucional, tanto en las protestas sociales del 2003-2004 como durante las protestas agrarias en el conflicto de la Resolución 125.

Se tomaron medidas precisas y razonables para la utilización de los cuerpos de seguridad ante las distintas formas de las protestas sociales como marchas, cortes, ocupaciones y acampes, desoyéndose el clamor bienpensante de orden y represión. El cumplimiento del mandato constitucional no debería ser en sí un mérito, sino la mera observancia de una obligación legal impuesta a cualquier gobernante. Sin embargo el mandato de Néstor Kirchner fue el primero desde la restauración democrática de 1983 en el que no hubo que lamentar víctimas fatales en situaciones de protesta social cuyo control estuvo a cargo de fuerzas federales, condición que afortunadamente se ha mantenido hasta el presente, en el mandato de Cristina Fernández.

Y si se quiere un ejemplo escolar de la demonización a la que se hacía referencia en el comienzo de este acápite, se puede leer el texto recientemente dirigido por un prelado a la orden de las carmelitas y hecho público, a propósito del proyecto de modificación de la legislación habilitando el casamiento de personas del mismo sexo: “No seamos ingenuos: no se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva del plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo (este es solo el instrumento), sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”.

Es curiosa la recurrencia a categorías específicamente religiosas para afrontar un debate en la sociedad civil. El matrimonio es un sacramento para el ordenamiento religioso que el Estado respeta. El problema es que algunos dignatarios eclesiásticos aún no respetan el ordenamiento normativo del Estado nacional, como ocurriera hace más de un siglo en los debates para introducir el matrimonio civil en la legislación nacional.

Lo que se debate es cómo organizar una institución civil como el matrimonio, que ha tenido mutaciones a lo largo del proceso civilizatorio y que reconoce matices en nuestra cultura y adquiere formas diversas en otras. Por lo mismo, plantear el matrimonio como una institución inmutable, por su fundamento religioso, a propósito de una discusión sobre la institución civil es una decisión intelectual voluntaria, que impide el debate al establecer un punto de partida autoreferido.

Pero hay más. El problema real reside en la caracterización de la acción en curso y en su verdadera naturaleza, aspectos advertidos por el dignatario en su texto.

Así llama la atención de los hijos de Dios, porque está en curso una acción diseñada para atentar contra el plan divino, que astutamente se oculta en los ropajes de la mentira, aduciendo que solo se trata de un debate político sobre la forma de una institución civil. Se esconden de esa manera –“el debate es solo el instrumento”–, siguiendo la movida del orquestador de todo este plan diabólico, que es el padre de la mentira.

Diez siglos de elaboración en Occidente para distinguir entre lo religioso y lo estatal, entre lo público y lo privado, para fundar la libertad civil con independencia de las creencias religiosas, parecen haber transcurrido en vano.

Frente a lógica de estos argumentos es difícil no recordar las palabras de Talleyrand a propósito de los Borbones, cuando la monarquía francesa fue restaurada después del ciclo revolucionario: “Nada han olvidado, nada han aprendido”.

La idea de que todo es lo mismo. Su perniciosidad política

La idea tan poco clásica y tan errónea de que todo es lo mismo, es una idea de una perniciosidad asombrosa. Y esa idea estuvo en la base de la prédica de Carrió cuando todavía deslumbraba a algunos sectores progresistas. Y la secuela de una igualación tan ideológica e interesada ha culminado en un difuso estado de sospecha sobre la actividad política en su conjunto, siempre pasible del escándalo o del descubrimiento de un acuerdo o transacción descalificadora que refuerce la idea primera de que cualquier político siempre puede ser un mandatario infiel, más proclive a realizar sus intereses que los comunitarios. Y aquí no se trata de hechos, sino de un lombrosiano remedo del derecho penal de autor, que funda la sospecha criminal por ser, no por hacer.

Y para seguir con la metáfora penal, el mundo *massmediático* de la antipolítica también se ha apropiado del órgano acusador: tiene habilitados muy pocos fiscales para realizar la función de saneamiento autoatribuida, productores de *best sellers* que luego del estruendo inicial terminan rápidamente en las mesas de ofertas de la calle Corrientes.

La potenciación del discurso de la antipolítica

La radicalizada crítica de la política realmente existente en clave de derecha fue continuada por los grandes grupos mediáticos que asumieron un poder desconocido en la fragmentación y vaciamiento de los partidos e instituciones nacionales y comenzaron a reciclar contra el kirchnerismo viejísimos argumentos del gorilismo de distinto signo. Desde luego que los medios no inventan la realidad política, pero como los viejos fotógrafos de plaza la retocan, la potencian en direcciones acordes con sus intereses, la modulan, la influyen, la tensan y por momentos conducen y articulan sus actores.

No están afuera ni lejos, son parte del entramado político, en demasía, por la deserción, los incumplimientos y las imperfecciones del sistema político de sus funciones básicas en la sociedad. Y hay interés en la continuidad de este estado de cosas pues el desprestigio de la política es proporcional al aumento de poder de las empresas de medios. No es casual entonces que un destacado empresario periodístico se jactara de su capacidad de ser elector de presidentes, ni que el pliego de condiciones que recibió el presidente Kirchner al asumir le fuera acercado por el directivo de una de las empresas más importantes del rubro.

Definen con claridad su rol frente al sistema político cuando potencian lenguajes apocalípticos, permiten la siembra de predicciones crípticas, alarmistas o pesimistas con peligros solo conocidos por quienes los enuncian, establecen estados de sospecha que invierten la carga de la prueba, contemplan con impavidez la inflación de adjetivaciones, toleran homologaciones desproporcionadas y ofensivas sobre situaciones históricas dramáticas para aludir a realidades claramente diversas.

En este contexto resulta por lo menos curioso que haya políticos opositores que se crean a salvo del estado de sospecha de la antipolítica, sin ver que solo constituyen la prueba circunstancial de que algunos no cumplen el estereotipo que ya ha sido establecido en el sentido común. Bastará un ligero apartamiento de los lineamientos mediáticos dominantes, luego o mañana, para que comprendan tardíamente su error y su condición.

La oposición: dispositivo y líneas de acción

El dispositivo opositor

El arco opositor al kirchnerismo, al no contar con una fuerza central y un liderazgo alternativo, está obligada a la unificación discursiva y a la confluencia en un plan de acción parlamentario que le permita una gran visibilidad en un escenario particularmente apto porque el oficialismo está en minoría y porque las acciones parlamentarias tienen una amplificación garantizada en el complejo mediático opositor que las potencia, moldea o condiciona en un curioso ejercicio de conducción cultural. La introducción de planteos judiciales permite en ocasiones que el dispositivo pueda abarcar a miembros del Poder Judicial, como ocurrió en los debates por el pago de la deuda con reservas, a comienzos de año.

El dispositivo opositor está organizado sobre la centralidad mediática que provee la unificación discursiva, desgasta las posiciones oficiales y amplifica las acciones opositoras parlamentarias, partidarias, judiciales y de cualquier otra fuente que pueda inscribirse en el marco confrontativo.

El complejo opositor mediático tiene sus naves insignia en la prensa escrita, con sus columnistas de opinión y sus periodistas especializados por temas, que definen las orientaciones discursivas que van a ser retomadas por una pléyade de medios orales y las señales televisivas noticiosas y las van a recrear y reproducir de variadas formas pero sobre el núcleo discursivo pergeñado por las figuras intelectuales centrales. Estas figuras trabajan también desde otros formatos radiales y televisivos, pero la estructura conceptual en la que organizan su visión sobre lo que sucede en el país se comunica mediante sus artículos en la prensa escrita.

Las retraducciones son operadas por una infinidad de comunicadores en los pisos de los medios (estudios de radio y televisión), normalmente con escasos recursos intelectuales, poca información y bastante idea previa, con estéticas diferenciadas según las audiencias; y por los operadores de campo, movileros y noteros, que normalmente hacen exteriores buscando confirmar lo que ideológicamente suponen, con pocas excepciones.

Se completa este entramado mediático con los receptores “construidos” por los programas o por las versiones digitales de los grandes medios, además de portales y otros emprendimientos periodísticos.

En esta categoría entran los “oyentes” que realizan ruborizantes halagos sobre los programas y sus conductores, o radicalizan los discursos que acaban de oír en una retroalimentación previsible. Sin más identificación que el nombre de pila y el barrio o ciudad que habitan, intervienen con banalidades variadas que son toleradas porque cumplen una manipulable función en espejo.

Y los “lectores” de los medios digitales que subrayan su peculiar acompañamiento a la actividad periodística, con habitual ferocidad y proclividad, y en ocasiones desde textos incursos en el Código Penal.

La construcción discursiva no es neutra y la ausencia de límites en resguardo institucional es otra curiosidad cultural argentina. No se trata de censura ni de autocensura, pero la publicación de comentarios enconados, ofensivos, apologéticos del terrorismo de Estado o de la violencia draconiana y simplista frente a la delincuencia, degradantes de la convivencia democrática, presentados como la inocente y espontánea opinión de “lectores” en las áreas digitales de los grandes medios podría tener otro tratamiento y otra razonabilidad sino hubiera una precisa intención política en acogerlos y utilizarlos como una especular pedagogía mediática.

El conjunto mediático opositor, hegemónico en recursos y en uniformidad discursiva, también realiza periódicamente campañas preventivas en las que denuncia severas restricciones a la libertad de prensa y ataques a la prensa independiente, y promueven pronunciamientos de instituciones nacionales e internacionales estructuradas sobre el interés mediático empresario.

El Parlamento como construcción mediática

Previendo el retroceso electoral gubernamental en las elecciones de año pasado, las usinas mediáticas advirtieron el valor del espacio parlamentario como un renovado escenario para combatir, acorralar y desgastar al oficialismo y buscaron elevar su visibilidad y su valor simbólico, instalando la idea de un parlamentarismo de nuevo tipo a partir de diciembre de 2009.

Se acuñó la expresión “promesa de un gobierno del Congreso”⁸ para esta fantasía mediática, con potencial riesgo institucional pues, según el discurso y el comunicador de que se tratare, incluía un menú abierto de funciones a cumplir por la institución parlamentaria, sin verificación en la historia política nacional, ni en el texto constitucional.

El “nuevo Parlamento” resultó un difuso deber ser parlamentario fijado desde el simple sentido común, fundado en una idea silvestre de la división de poderes. Alimentado por las urgencias de la lucha con el kirchnerismo, y comunicado y proyectado sin responsabilidad alguna en el espacio político-social.

La instalación de esta idea de un Parlamento opositor y expeditivo –“que se haga notar”, “que ponga límites”, “que impida que el oficialismo haga lo que quiera”–, empujó la unificación opositora en el Grupo A y estuvo en la base de su gestualidad inicial, que implicó modificar tradiciones legislativas en la distribución y composición de las comisiones de labor parlamentaria.

Otro aspecto de esta construcción mediática está relacionado con la urgencia en la concreción de las acciones opositoras y la poca tolerancia ante la aparición de cualquier demora o traba en su materialización. Esta lógica de urgencia tiende a desconocer las características del trabajo parlamentario que requiere el cumplimiento de un conjunto de pasos y procedimientos reglados para garantizar resultados profesionales en el proceso de aprobación de leyes y la participación de pluralidad de actores en su elaboración.

En la construcción mediática del “nuevo Parlamento” la inclusión de la urgencia resulta estratégica. Si logra el efecto de condicionar y acelerar los tiempos legislativos muestra que es posible una mayor celeridad y subraya el rol mediático para obtener rápidos resultados. Si no lo logra, activa el estado de sospecha sobre la totalidad de la actividad política y se constituye en una prueba adicional sobre las dificultades en su recuperación.

Estas enunciaciones elementales y maniqueas, atractivas por su simpleza y su aparente sencillez, pueden conducir a problemas institucionales

⁸ La interesante fórmula le pertenece a Luis Tonelli.

si se convierten en guías de acción. Niegan la naturaleza del juego político legislativo que es siempre, aun en etapas de hegemonías, un mundo de articulaciones, de relaciones, de negociación y de composición de intereses diversos.

Los discursos de emplazamiento al Congreso durante la crisis de la R125 tenían ese tono binario: el modo de responder al mandato popular era único –rechazar la R125 entonces, rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo ahora, por contrariar el plan divino–, y caso contrario invocaban futuros castigos electorales a cargo de airados y memoriosos votantes.

La enunciación y propagación de discursos tan frontales y fundamentalistas, sin el correlato de inmediatas reacciones políticas e institucionales que los limiten enérgicamente, señalan la preocupante supervivencia de condicionantes a la convivencia democrática de los argentinos.

El ejercicio parlamentario cotidiano

En la vida parlamentaria la negociación y los intercambios son la materia sobre la que se construyen los acuerdos. El problema consiste en saber si las transacciones y los acuerdos realizados se sustentan en la legalidad institucional y en la legitimidad funcional, tanto desde el punto de vista de la materia que fue objeto de debate y acuerdo, cuanto de los elementos puestos como contrapartida para conciliar posiciones. El problema no es negociar, conciliar o realizar transacciones. La cuestión es si tales actividades respetan los intereses que se componen y articulan, evitando cualquier desvío interesado de la lógica parlamentaria.

En la arena democrática la actividad política, y por ende la parlamentaria, tiene un doble componente: el programático y el transaccional. Es una cuestión de proporciones y esas proporciones marcan el grado de madurez, integración y representación del sistema político que se trate, porque las acentuaciones unilaterales producen deformaciones significativas.

La política como intercambio, meramente transaccional, resulta un pragmatismo sin más horizonte legitimador que el interés individual o grupal ejercido y habitualmente –por su desinterés en el modo de inscripción de su acción–, solo resulta útil a los poderes constituidos.

La política como mera enunciación programática es utópica o testimonial.

Las propuestas de raigambre popular y progresista organizan su acción colectiva sobre una referencia programática que genere lealtades, organice un sistema de acciones, forme cuadros dirigentes en un contexto ideológico y conceptual, y acumule representación social y política dentro de la identidad elegida.

En la actividad parlamentaria o en el ejercicio político en diversos escenarios resulta indispensable la habilidad y la capacidad del ejercicio

negociador, del intercambio que permita relacionar intereses, dosificarlos, gestionarlos, resolverlos y acumular pequeños éxitos en la perspectiva elegida.

Entonces, lo programático y lo transaccional resultan componentes necesarios de la labor legislativa cuya presencia armónica se verifica en los sistemas maduros y estables, pero entre nosotros parece haberse extraviado la receta sobre las proporciones entre ambos componentes. Y la responsabilidad de ese extravío es compartida por las debilidades de un sistema de partidos con su capacidad de representación en crisis y por los discursos mediáticos que urgen y compelen a la actividad parlamentaria a obtener resultados sobre una agenda de confrontación y simultáneamente reniegan de los procesos de negociación, la materia sobre la que se amasan legislativamente tales resultados, sobre todo cuando en ellos interviene el oficialismo.

La agenda opositora en el Parlamento

Como se dijo, el arco opositor al tener divididos sus espacios principales, encontrar dificultades en sus articulaciones y no contar con un liderazgo alternativo afianzado, necesitaba la unificación discursiva y la confluencia en un plan de acción parlamentario como espacio principal para su visibilidad y su acumulación.

Este plan de trabajo es el corolario de la elaboración de diversos núcleos de sentido opositores, algunos de los cuales se ha tratado de describir y reseñar más arriba. Su síntesis es la identificación de un conjunto de iniciativas concretas que permitan organizar disputas de diversa entidad –escaramuzas, combates decisivos–, obtener resultados y presentarlos socialmente como la concreción de la antigua promesa preelectoral de batir al oficialismo, “ponerlo en su lugar”, “hacer funcionar al Parlamento”, “enseñarle modales”, etcétera.

A esta agenda parlamentaria los líderes mediáticos le dedicaron ríos de tinta en su esfuerzo por situar los núcleos de ataque de mayor desgaste y exposición para el oficialismo.

En lo que sigue se resumen las principales líneas de iniciativa legislativa opositora, sin pretender agotar la descripción de su despliegue parlamentario.

a) Limitar el volumen de los recursos estatales disponibles, para reducir la capacidad de inversión pública, achicar la capacidad de desplegar políticas públicas activas, en particular las sociales, y frenar la capacidad de reasignación de partidas presupuestarias.

Su traducción en el lenguaje más crudo de los editorialistas opositores es que se trata de limitar el manejo de la “caja”, caracterizada como una herramienta política central para disciplinar, subordinar y presionar a los

gobernadores e intendentes, y para distribuir los siempre sospechosos subsidios y prebendas entre los empresarios amigos del poder.

Algunos retraducen esta perspectiva de limitar el volumen de los recursos estatales disponibles para la gestión gubernamental desde la óptica del neoliberalismo económico, fundando su aval a este lineamiento opositor en su tradicional desconfianza hacia el rol del Estado, oponiéndose a casi cualquier expansión de su actividad reguladora y promotora.

Desde un ángulo diferente, otros se ocupan de estudiar las asimetrías en la distribución de los recursos federales, reclaman por la falta de reglamentación legal de la coparticipación y claman por la discrecionalidad que tal vacío normativo habilita. El corolario es la denuncia de la voracidad del Estado nacional frente a las empobrecidas provincias en abierto desconocimiento de los fundamentos del federalismo.

Sin agotar los ángulos, otros más describen su interpretación sobre los réditos políticos que implica el manejo de los recursos estatales. Y todos machacan sobre la necesidad de limitar la disponibilidad oficial de recursos económicos y financieros y sobre la ilegitimidad de su manejo: político, económico, constitucional.

Esta es una pequeña descripción de la modalidad poliédrica del dispositivo mediático que confronta desde una pluralidad de perspectivas convergentes en su finalidad política. Las críticas se reiteran desde las distintas secciones de los periódicos con una coordinación casi orquestal, labrada en las redacciones de los medios opositores con mucha inteligencia política y un aprecio a las lógicas institucionales subordinado a sus intereses. En esta línea se inscribe la modificación a la ley del cheque (redistribución provincial de recursos federales), el proyecto de revisión del presupuesto en ejercicio aprobado en término legal, los diferentes proyectos que propician la baja o eliminación de retenciones, el proyecto que promueve la aplicación del 82% móvil a los haberes jubilatorios, entre otros. La supresión de los llamados superpoderes atiende a limitar las reasignaciones de partidas dentro de los montos presupuestarios aprobados, en la órbita del poder administrador.

Ya se anotó que el proyecto sobre mejora jubilatoria ha sido celebrado como ejemplo de la primera ofensiva exitosa del Grupo A por su capacidad de poner al oficialismo en un brete defensivo:⁹ complica al kirchnerismo por izquierda, deslegitimación que es juzgada como estratégica porque desgasta su anclaje principal en la tradición nacional-popular. Resulta indicativo de un estado de cosas y hace comprensibles ciertas audacias mediáticas el hecho que quienes motorizan este celebrado proyecto hayan sido los responsables directos de la ilegal reducción de los montos jubilatorios durante el gobierno aliancista. El olvido que todo lo oscurece, permite estas mágicas reapariciones.

⁹ Ver el ilustrativo artículo de Mariano Grondona, "Por primera vez, el oficialismo perdió la ofensiva", en *La Nación*.

b) Reasumir en plenitud el conjunto de facultades legislativas delegadas poniendo fin al manejo del Poder Ejecutivo sobre un conjunto de dispositivos estatales.

Para las tesis opositoras que asimilaban el Congreso Nacional con una escribanía se trata de una oportunidad regia para mostrar su voluntad política de limitar al oficialismo.

Sin embargo, las facultades delegadas no son el producto de una voluntad de dominio kirchnerista sobre el Parlamento, sino el resultado de un largo proceso delegativo –en la mayoría de los casos de naturaleza técnica–, fundado en la complejidad organizacional del Estado moderno que requiere de tales facultamientos al poder administrador como forma de resolver una infinidad de problemas operativos, fuera del alcance de los procedimientos legislativos.

La prédica opositora confunde curiosamente delegación con ausencia de control. Los parlamentos modernos proceden en general a las mismas delegaciones que el Grupo A –en éxtasis opositor–, se prepara para rechazar. La diferencia es que otras instituciones parlamentarias establecen de modo riguroso las condiciones que permiten cumplir con el ejercicio del control sobre tales delegaciones exigiendo recursos, información temporánea y ejerciendo sus facultades sancionatorias frente a los funcionarios remisos.

Ejercer el control institucional supone la construcción de plantas profesionales estables y concursadas en las comisiones de asesoramiento y asesores especializados en las plantillas de los miembros del Poder Legislativo. Los mismos que exigen la reasunción completa de las facultades delegadas, conocen de sobra las debilidades de los equipos legislativos, pero su objetivo político es otro.

Es previsible que cuando venza el plazo de la última delegación legislativa se marche a un escenario de tensiones institucionales sobre el ejercicio de las mismas, escenario en el que la oposición relanzaría el debate sobre las retenciones a los productos agrarios –reivindicando esa facultad para el Congreso–, y simultáneamente replantearía el problema del volumen del financiamiento estatal.

c) Limitar y controlar las actividades de los organismos de inteligencia estatales. Quebrando la tradición legislativa y los acuerdos que dejaban en manos del oficialismo la supervisión de tales organismos, el Grupo A pasó a controlar la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, a través de una diputada del peronismo disidente. En cualquier institucionalidad madura el control parlamentario de la inteligencia nacional se toma con mucha seriedad y queda expresamente fuera de las pujas coyunturales entre las fuerzas políticas.

Las políticas de inteligencia son políticas de estado al servicio de la defensa de los intereses nacionales, sin embargo en el embate mediático

co opositor la acción se presentó como un modo de limitar el acceso del Poder Ejecutivo a información privilegiada, operaciones encubiertas y escuchas telefónicas.

d) Una cuarta línea de acciones de la agenda opositora está relacionada con agitar la reversión de leyes dictadas en la etapa de la mayoría oficialista en el Congreso Nacional. En particular, la reversión de la reforma del Consejo de la Magistratura en la que el Grupo A obtuvo la media sanción de Diputados para un proyecto modificatorio, y la reforma de la recién aprobada ley de medios.

Con relación al Consejo de la Magistratura el principal argumento a favor de su nueva reforma fue que los anteriores cambios impulsados por el oficialismo solo buscaron convertirlo en un marco institucional de control y manipulación de la Justicia. Las estadísticas del propio Consejo, luego de los cambios de 2006 muestran un panorama fáctico muy distinto a la construcción mediática. La abrumadora mayoría de los temas fueron resueltos por unanimidad tanto en decisiones sobre elevación de ternas, cuanto en expedientes en los que se ventilaban cuestiones disciplinarias y juicios políticos. Y lo más contundente: “En un solo caso los consejeros del oficialismo votaron solos contra todos los demás, y quedaron en minoría. No hay un solo caso en el que los consejeros del oficialismo, votando en bloque, hayan impuesto una decisión”.¹⁰

Más allá de la incoherencia fáctica detectada con relación a la argumentación mediática, el proyecto retrocede en la representación de los estamentos de elección popular y refuerza la sobrerrepresentación judicial, tornándose más apta para la preeminencia de los intereses sectoriales y corporativos.

La batalla sobre la ley de medios audiovisuales es de largo aliento y no transcurre hoy primordialmente en el Parlamento: se lucha en su proceso de puesta en marcha y con las decisiones judiciales que hacen lugar a planteos contrarios a su vigencia. El fallo de la Corte fijando un límite preciso a la judicialización de la actividad de otros poderes le puso un freno al desbocado activismo judicial del poder mediático.

e) La quinta línea de trabajo está vinculada a los temas que desde la óptica opositora requieren investigarse porque estarían comprometidos hechos de corrupción.

En esta lista, los columnistas opositores introducen como temas de repercusión parlamentaria casos que están siendo ventilados en expedientes judiciales por ante sus jueces naturales –causas por adulteración de medicamentos; posibles maniobras ilegales con subsidios estatales–,

¹⁰ Véase “A un año”, por Horacio Verbitsky, publicado en *Página/12*.

y que por lo mismo no tienen cabida en una agenda legislativa en tanto investigación en sí. Sin embargo, en virtud de la resonancia mediática que se ha decidido otorgarle al caso de la llamada diplomacia paralela venezolana, y a pesar de que este caso también tiene un juez a cargo de una investigación sobre posibles ilícitos, el Grupo A ha abierto un escenario parlamentario.

Para las construcciones mediáticas que por distintas razones intentan asimilar el kirchnerismo con el menemismo de la década pasada, buscar y encontrar hechos que puedan catalogarse como corrupción constituye la prueba que permite validar el resto de sus aseveraciones.

El caso de la diplomacia paralela en Venezuela tiene muchos ingredientes para tejer un conjunto de sentidos y deslizar otros. Por eso se mantiene en la tapa de los diarios solo con los recuerdos tardíos de un ex embajador que arguye que ha cumplido sus deberes de funcionario público enviando un cable confidencial, convenientemente distribuido a la prensa, y su silencio por cinco años, súbitamente quebrado cuando un juez le preguntó, como testigo, acerca del tema. Y eso sí, rota la abstinencia no ha parado de hablar, alimentando la maquinaria periodística opositora, y su propia y efímera notoriedad.

Solo la búsqueda desesperada de un caso le hace intentar a los dirigentes mediáticos su formulación con tan pocos elementos, aun con el añadido de una curiosa intervención de otro funcionario.

El oficialismo: el desafío del 2011

La voluntad de continuar

La posibilidad de lograr una nueva modificación estratégica de la relación de fuerzas sociales y políticas a favor de la ratificación del ciclo abierto en 2003 reside en las acciones que se diseñen y se tomen en los meses que faltan para la cita electoral de 2011, cuando se dirimirá democráticamente tal pretensión.

Desde los difíciles días posteriores a junio de 2009 el gobierno nacional mantuvo con fuerza su política de defensa activa que le permitió sostener el ritmo de la gestión gubernamental y recuperar una porción importante de imagen positiva en los estratégicos sectores medios urbanos que antes habían tomado distancia por argumentos diversos.

El plan de trabajo del kirchnerismo para resolver el reto de la continuidad implica organizar esfuerzos simultáneos: evitar el desgaste de su salud política por el ejercicio de la acción opositora (no perder consensos ni recursos políticos), y a su vez lograr una acumulación adicional de fuerzas que le permita ganar en la primera vuelta de la elección de 2011 (sumar sectores independientes, centristas y progresistas).

La complejidad de su plan de trabajo consiste en repartir su atención sobre un extenso universo de acciones. Esto implica un desafío pero a la vez constituye una parte importante de su capital político porque le permite exhibir férrea voluntad política y capacidad de gestión, habilidad para sostener la iniciativa política táctica sobre un programa de contenido popular, mantener sus alianzas y confrontar con una enorme coalición de poderes permanentes. Todo ello respetando el marco de convivencia democrática y garantizando un amplísimo ejercicio de las libertades públicas.

Sostener la gestión y defender la institucionalidad

Sobre la base de la legitimidad del mandato obtenido en las elecciones de 2007 el oficialismo está dispuesto a sostener su derecho a gestionar el país utilizando todas las herramientas institucionales y los procedimientos que le faculta el ejercicio de la presidencia. Ello implica oponerse y evitar las iniciativas opositoras que pretenden desbaratar la capacidad de gestión estatal mediante la reducción de los recursos disponibles –modificando las normas que regulan las fuentes de recaudación–, o que buscan reducir los facultamientos técnico-legales a favor del poder administrador, aduciendo una mejoría en la división efectiva de poderes estatales.

Es previsible el desarrollo de confrontaciones importantes sobre el origen y el volumen de los recursos fiscales, en especial sobre las retenciones a la soja, y sobre el presupuesto nacional para el 2011, donde los sectores más duros del arco opositor buscarán reducir la dotación de recursos estatales con la previsible argumentación de evitar su uso en un año electoral.

Solo acuerdos estables y maduros en un sistema de partidos y en una sólida tradición parlamentaria podrían evitar el espectáculo que se avecina. Pero la posibilidad real de que no suceda supondría un mayor acatamiento institucional de los poderes permanentes –de distinto tipo y origen– y de una mayor inteligencia de buena parte de la clase política. Sobre todo de la que hoy expresa la oposición, para preferir acuerdos en un sistema político estable y responsable antes que las ilusorias ventajas inmediatas obtenidas por relacionarse –y también subordinarse–, a los intereses antagónicos de tales poderes permanentes.

La defensa de la institucionalidad es un límite preciso que el oficialismo tendrá que sostener en los momentos en que arrecien los debates parlamentarios y mediáticos y aumenten las tentaciones de conductas antisistémicas promovidas por sectores minoritarios pero audaces, que aún conservan fantasías destituyentes. La firmeza y el equilibrio en la defensa del marco democrático, más allá del ruido mediático, pueden ser decisivos en la consideración de importantes sectores medios que difícilmente acepten crisis institucionales y que van a observar con cuidado el comportamiento de los actores en estas confrontaciones.

La defensa de lo realizado

En la lucha por su futuro político el oficialismo pondrá sobre el tapete el recuento de lo realizado y su valoración positiva. En este sentido, se va a agudizar la batalla cultural por la consideración política, económica y social de la gestión gubernamental en sus dos períodos.

El discurso mediático reduce los aciertos de la labor gubernamental a su asociación con eventos externos que explican el éxito por la mera coexistencia de los hechos, sin relación causal entre sí. Así el crecimiento económico a altas tasas en la mayor parte del ciclo abierto en 2003 es consecuencia de la gran demanda de los países emergentes que presionaron al alza todas las commodities, entre ellas las argentinas, y no consecuencia de decisiones de política económica, tomadas por el poder administrador. Solo, como se dijo, coexistencia afortunada con hechos exteriores.

Otro tanto ocurre con el manejo de la crisis financiera internacional que el país soportó mejor que economías europeas más desarrolladas. Bastan unas pocas imágenes de las calles de Atenas para recordar escenas similares en ciudades argentinas. Sin embargo, editorialistas y columnistas opositores se las arreglan para diluir este mérito en la previa desconexión argentina de los mercados financieros (lo que es cierto, pero también lo es que ellos apostrofaban esa falta de conexión –ahora virtuosa– como la incapacidad gubernamental para ingresar al mundo). Otra argumentación que se ha usado es que toda la región ha tenido una buena *performance*, como si cambiando el sujeto de la oración se pudiera obviar que la región tiene gobiernos que han impulsado políticas macroeconómicas parecidas, estrategias de desendeudamiento y crecimiento de los intercambios económicos sur-sur, entre otras acciones, responsables de ese mejor desempeño regional. Otro criterio de impugnación oblicuo es señalar méritos de otra economía por organizar con anticipación medidas anticíclicas y criticar con una fuerte carga ideológica las supuestas razones por las que no se tomaron medidas similares en el país (despilfarro de recursos por utilización política y/o populismo incorregible).

La avara desconexión que proponen los líderes mediáticos opositores en lo social se emparenta con otra desconexión más biográficamente situada y cómoda para una parte de los sectores medios, acostumbrados culturalmente a la queja por la situación general, producto siempre de la política y los malos gobiernos, y a la apropiación individual de las mejoras colectivas, argüidas como esfuerzo propio.

Otras veces el efecto de restar mérito se obtiene paradójicamente a partir de reconocerle valor a la acción, para diluirla de inmediato en la obiedad de su necesidad o por naturalizarla como un hecho ya dado en el tiempo. La renovación de la Corte Suprema menemista fue una medida

adecuada y necesaria –que el gobierno de la Alianza ni se planteó ni intentó–, pero que ocurrió hace mucho y que ya fue “descontada” por la dinámica institucional.

En algunos temas, solo los sectores más vinculados culturalmente a la dictadura se hacen cargo de argumentar, mientras el resto guarda un atento silencio. La política de derechos humanos ha sido uno de los logros principales del ciclo kirchnerista. Las críticas a la misma –hemipléjica, revanchista, ofensiva a las fuerzas armadas–, los pedidos de amnistía para los genocidas, las impugnaciones a los juicios, y los esfuerzos por reciclar la teoría de los dos demonios e igualar el carácter de la violencia terrorista de Estado con la que ejercían grupos irregulares en armas, no parecen tener chances de audición ante el enorme espesor cultural y social de la política del gobierno nacional basada en la lucha histórica del movimiento de derechos humanos y en las consignas de memoria, verdad y justicia.

La disputa de sentidos está establecida en un extensísimo frente ideológico y político, en el que los dispositivos opositores esgrimen diversos argumentos para relativizar, rechazar o invalidar los resultados de la acción gubernamental.

Y es en estos núcleos de sentido en disputa donde el oficialismo juega una parte de sus posibilidades electorales. Deberá organizar y ampliar su capacidad mediática para intervenir en tiempo y forma en la capilaridad de esos debates poniendo en valor los activos políticos del oficialismo.

Parte de su éxito se construirá si logra eficacia en recordar que en el país las fuerzas de derecha prefieren denominarse de centro, y que a diferencia de lo que ocurre en otros países han ocultado históricamente los contenidos reales de sus programas hasta el momento de su implementación, cuando es tarde para lágrimas.¹¹ También sería un buen ejercicio de autodefensa de los sectores medios recordar que las propuestas neoliberales no otorgan las condiciones económicas de los gobiernos con programas populares (desde el valor de los servicios al sostenimiento del empleo en blanco; desde una mayor actividad económica sin ajuste a estímulos crediticios).

La crisis del 2001 parece hoy lejana en la conciencia cotidiana de los ciudadanos, a la luz de lo avanzado desde aquellos días. El oficialismo obtendría una ventaja interesante si encuentra el modo de acercarla a los debates actuales estableciendo los correlatos intelectuales y emocionales entre aquellos resultados y las enunciaciones y trayectorias políticas de quienes proponen las mismas ideas que desembocaron tan mal hace tan poco.

¹¹ Menem declaraba sin rubor que en la campaña electoral de 1989 le hubiera resultado imposible adelantar la orientación de su gobierno, pues en ese caso no hubiera ganado la elección presidencial.

El contenido popular del programa

El kirchnerismo, que orientó su acción gubernativa sobre los lineamientos generales del ideario justicialista, puede generar expectativas sobre su continuidad y sobre nuevas medidas de signo popular, apalancado en la credibilidad de las acciones realizadas.

La profundización del programa popular junto con una convocatoria nacional pondrían al oficialismo en una perspectiva diferente y mejor para afrontar los decisivos meses que restan hasta la cita electoral, y permitiría una más amplia movilización de los recursos populares en la arena democrática.

La acción de gobierno en virtud de ese programa ha sido muy extensa y vale ejemplificar su dinámica y efecto en las políticas sociales.

Durante el presente ciclo se mejoraron en forma significativa las condiciones de vida de los pobres e indigentes y se sustituyeron los rudimentarios planes trabajar del primer momento de la crisis por un conjunto de herramientas que mejoraron sensiblemente su diseño y su eficacia social, incorporándose políticas sociales universales para ampliar la calidad de su impacto y el volumen los beneficiarios.

Sin embargo, sostener tales políticas implica mantener en el tiempo su equivalencia adquisitiva impidiendo el deterioro de su capacidad de compra y de este modo cumplir el objetivo de transferir una gigantesca masa de recursos directamente a los más necesitados entre los necesitados, sin intermediarios de ningún tipo, para que puedan consolidar una mejoría cierta en su nivel de vida.

La inflación es el mecanismo a través del cual se deterioran los montos que perciben los beneficiarios de las asignaciones y de los asalariados por la modificación al alza de los precios de los bienes. Las razones inflacionarias pueden ser variadas en la economía, pero en uno de sus sentidos principales expresa la lucha entre precios y salarios, un mecanismo que aplica los formadores de precios sobre todo los de las cadenas de valor de los bienes-salario para equilibrar la capacidad de negociación sindical y obtener ganancias extraordinarias, cuando el Estado tiene políticas activas y distributivas.

Resulta por ello importante políticamente para el oficialismo resolver o atenuar el tema inflacionario, sobre todo en su conexión con los beneficiarios de las asignaciones y de los asalariados en general cuyos ingresos fijos resienten las agresivas estrategias empresarias de fijación directa de precios, tanto en la etapa de producción como en las de intermediación y consumo.

Sin demasiada capacidad para elaborar estrategias alternativas reaparecen de inmediato en las biografías de los sectores populares las privaciones de la pobreza o de la indigencia y políticamente su frustración se inscribe entre otros modos, como incredulidad o desesperanza, la materia mediática por excelencia para construir su poder frente al sistema político.

Por todo ello, la continuidad y profundización de un programa popular tiene que avanzar y resolver, por su volumen político, una clara y razonable política pública de regulación e intervención en las cadenas de valor que afectan en forma directa el consumo popular y prestar una atención significativa en términos regulatorios a los mismos procesos involucrados en los consumos más diversos y sofisticados de los sectores medios.

Convocatoria y organización popular

Otro aspecto importante a considerar en la continuidad de un programa popular consiste en la capacidad de movilización y organización de las energías sociales populares que lo sustentan y que con su participación organizada legitiman el sistema político como espacio institucional de gestión y de realización del interés general y de los intereses nacional-populares en forma combinada.

Estas convocatorias para ser eficaces requieren ejecutarse de modo centralizado, realizarse con amplitud y generosidad, acortando plazos y allanando los típicos problemas de ordenamiento de grupos diversos y fuerzas pequeñas, celosas de los espacios individuales trabajosamente obtenidos y sostenidos.

El programa compartido y la conciencia de que la clausura de este ciclo gubernamental sería sucedido por una restauración conservadora tiene virtualidad para forzar los tiempos del trabajo político, desarrollando espacios movilizadores de mayor eficacia política y mayor potencia en las acciones.

Tratándose de una disputa significativa pero claramente enmarcada en la arena institucional el esfuerzo de aunar voluntades, recursos y capacidades no puede estar teñido de tremendismos de final de época sino alentado por una aguda conciencia democrática respecto a las consecuencias de un retroceso popular.

Coincidiendo con la convocatoria general a la participación de los sectores populares resulta necesario construir una visión estratégica sobre la sociedad argentina, su desarrollo y las acumulaciones populares traducidas en acciones, estructuras y políticas. Pero también como cultura, como arte, como relato, como compromiso compartido de las mejores tradiciones nacional-populares y de la izquierda en la Argentina.

No pueden minimizarse las consecuencias en las biografías de millones de personas que supone cualquier programa de mayor pobreza popular, con las marcas personales, familiares y sociales de las oportunidades perdidas.

Y recordar aquella máxima heurística, igualitaria, jacobina, enunciada por Eva Perón, que proclamaba un derecho ante cada necesidad.

Cómo citar este artículo:

Talento, Miguel, “Los escenarios para la elección presidencial del 2011”, *Revista de Ciencias Sociales, segunda época*, año 1, N° 18, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, primavera de 2010, pp. 241-280.



Universidad
Nacional
de Quilmes
Editorial